



Erradicando la pobreza a través de una economía verde e inclusiva

Estableciendo los vínculos pertinentes entre el crecimiento económico sostenible, la protección social, la gestión racional y la salud ambiental, se podría poner fin a la pobreza. Otorgar el valor adecuado al capital natural y los servicios ecosistémicos, proteger, restaurar y mejorar los bienes naturales, asegurar un acceso equitativo a los recursos naturales y a servicios básicos obtenidos de forma sostenible, promover políticas e inversiones fiscales verdes e innovadoras, y dar seguimiento a los avances a través de nuevos indicadores, podría ser parte del camino hacia la erradicación irreversible de la pobreza a través de un crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo.

FACTORES IMPULSORES DE LA POBREZA

La pobreza es uno de los grandes desafíos a los que se enfrentan tanto el mundo desarrollado como el mundo en desarrollo. Los estudios indican que el crecimiento económico mundial de los últimos decenios y la liberalización del comercio han contribuido a que muchas personas salgan de la pobreza, pero no han logrado promover un desarrollo equitativo y sostenible en muchas regiones del mundo [1]. Se calcula que, para el año 2015, mil millones de personas, la mayoría de ellos procedentes de economías en desarrollo y en transición, estarán viviendo por debajo del umbral de la pobreza extrema con menos de 1,25 dólares por día [2]. En los Estados Unidos, alrededor de 4 millones de personas viven en la actualidad con menos de 60 dólares al mes [3]. La disminución mundial de la pobreza ha venido determinada por la reducción de la pobreza de ingresos de algunos países [4]. Sin embargo, estos éxitos no siempre han sido permanentes y, en ocasiones, se han alcanzado a base de ignorar o infravalorar las externalidades ambientales. Por ejemplo, entre 1994 y 2004, tanto en Etiopía como en la India, fueron aproximadamente tantas las personas que consiguieron escapar de la pobreza como las que se convirtieron en nuevos pobres [5]. También están cambiando los patrones de pobreza entre las zonas rurales y urbanas.

El gran desafío mundial de la rápida urbanización no planificada habría llevado a que el 61 % de los hogares urbanos de África vivieran en 2001 en barrios marginales/tugurios, frente al 40 % en Asia y el 32 % en América Latina y el Caribe [6]. En Kenia, la pobreza es más significativa en las zonas urbanas que en las zonas rurales [7]. La población pobre se ha urbanizado a un ritmo incluso mayor que la población en su conjunto. Durante el período 1993-2002, el número de personas que vivía con "1 dólar por día" disminuyó en 150 millones en las zonas rurales, pero aumentó en 50 millones en las áreas urbanas [8].

Sin embargo, es importante observar también algunas tendencias que pueden ser mucho más reveladoras que las mediciones basadas en los ingresos, las cuales no logran reflejar todas las formas de pobreza. **La pobreza es un concepto multidimensional que abarca la privación social, económica y ambiental [9].** La privación social se produce cuando se carece de un acceso adecuado a servicios sociales como la educación, la salud, el saneamiento, el agua, el albergue y la seguridad. Todavía más de 1.300 millones de personas siguen viviendo sin acceso a electricidad y otros 2.600 millones carecen de instalaciones limpias para cocinar —la mayoría de ellos en África subsahariana o las zonas en desarrollo de Asia [10]. Además, unos 783 millones de personas viven sin acceso a agua y 2.500 millones carecen de servicios de saneamiento [11]. Por lo tanto, en cuanto se tienen en cuenta otros aspectos además de los aspectos monetarios, el número de pobres aumenta. Así, por ejemplo, en torno al 39 % de la población de Etiopía vivía en 2005 con 1,25 dólares al día o menos. Sin embargo, el índice de pobreza multidimensional, que agrega estos factores sociales, indica que cerca del 90 % de los etíopes vive en situación de pobreza [12].

La privación ambiental se manifiesta en la forma de un acceso restringido a los bienes naturales, así como en una vulnerabilidad diferenciada frente al cambio climático, la degradación de los ecosistemas y la contaminación. La mayoría de las personas que viven en la extrema pobreza sigue encontrándose en zonas rurales, donde su principal fuente de ingresos es la agricultura [13]. Los servicios ecosistémicos y otros bienes no comercializados representan entre el 50 % y el 90% de las fuentes totales de sustento de los hogares rurales pobres —el "PIB de los pobres"— [14]. Los bienes comunes aportan en torno a 5.000 millones de dólares anuales a los ingresos de los hogares rurales pobres en la India, es decir, cerca del 12 % de sus ingresos [15]. Los servicios ecosistémicos derivados de la gestión de los recursos naturales configuran el componente más importante de la cartera de activos de casi todos los países de África subsahariana [16], mientras que el capital natural suponía en 2005 el 30 % de la riqueza total de los países de bajos ingresos [17].

Por lo tanto, la disminución continua de los activos naturales garantiza la perpetuación de la pobreza. La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio de 2005 estimaba que aproximadamente el 60 % de los servicios ecosistémicos que sustentan la vida en el planeta —como el agua dulce, la pesca, la regulación del aire y del agua o la regulación regional del clima, de los desastres naturales y de las plagas— se encuentran en proceso de cambio, de degradación o están siendo utilizados de forma insostenible, y no solo por los pobres [18]. La capacidad general de la agricultura para mantener a las personas a partir de la tierra es cada vez menor, al tiempo que crece la migración rural-urbana, sobre todo en los países asiáticos [19]. El Panel Internacional de los Recursos calcula que, para el año 2050, se habrá triplicado el consumo de recursos naturales [20]. El crecimiento de la población mundial hará que sea aún más difícil proporcionar servicios básicos a los pobres [21].

SOLUCIONES INTEGRADAS

Los profundos cambios de la globalización económica y financiera, la rápida urbanización de la pobreza, la mayor desigualdad dentro de los países y las cada vez más visibles amenazas al desarrollo humano y a la seguridad originadas por la degradación del capital natural y



las condiciones de vida piden un cambio de paradigma en la planificación para el desarrollo sostenible. Las medidas que los países están adoptando para avanzar hacia una **economía verde** (también conocida como civilización ecológica; o economía verde, inclusiva y baja en carbono; o economía resiliente al cambio climático o economía circular) ponen de manifiesto la creciente conciencia de que nuestra economía mundial, con sus 70 billones de dólares, necesita una reforma. El PNUMA define como economía verde aquella que se traduce en “la mejora del bienestar humano y la equidad social, al tiempo que reduce significativamente los riesgos ambientales y las escaseces ecológicas”. El camino hacia el desarrollo debe mantener, mejorar y, en caso necesario, reconstruir el capital natural como activo económico fundamental y fuente de beneficios públicos. Los derechos humanos y el medio ambiente están inextricablemente unidos a través del derecho de los ciudadanos a un medio ambiente limpio, sano y productivo.

Se requieren nuevas mediciones para comprender los avances hacia el desarrollo sostenible, nuevos indicadores que vayan más allá de los indicadores económicos y de desarrollo tradicionales (como el producto interno bruto o el índice de desarrollo humano), que no se limiten a evaluar el progreso actual, sino también el bienestar de las generaciones futuras. Por ejemplo, el índice de riqueza inclusiva (IRI) incluye una amplia gama de activos, entre los que figuran el capital fabricado, el capital humano y el capital natural, y muestra a los gobiernos el verdadero estado de la riqueza de su nación y la sostenibilidad de su crecimiento [22]. Una visión multidimensional permitiría ampliar el abanico de soluciones disponibles para erradicar la pobreza de forma definitiva.

Un acceso equitativo a los recursos naturales y a los derechos de tenencia de tierras contribuiría a incrementar los ingresos y mejorar tanto los medios de vida como la plena participación de los grupos pobres y marginados, en particular de las mujeres. La sobreexplotación de los recursos naturales y la pérdida de ingresos y medios de vida de los pobres están estrechamente vinculados a la falta de un acceso seguro a los recursos naturales y productivos y a la distribución de sus beneficios, y son exacerbados por el acaparamiento de tierras, el uso insostenible de la tierra, una gobernanza deficiente, la falta de un estado de derecho y la corrupción. Con frecuencia, los países con escasez de alimentos son también en los que más se produce acaparamiento de tierras para dedicarlas a las industrias extractivas y a la agricultura a gran escala, de manera que los grandes inversores exportan la producción de alimento y los agricultores pobres de pequeña escala se ven a menudo expulsados de sus hogares sin un trato justo o sin ningún tipo de compensación [23]. También se suman a los impactos que recaen sobre los pobres unas relaciones comerciales sesgadas y unas estructuras de tarificación inadecuadas. Una solución integrada sería que la asignación y el uso de la tierra y los recursos naturales se realizaran de manera equitativa, responsable y transparente para reducir el porcentaje de población rural sin tierra y proteger los bienes comunes locales, de manera que los beneficios se distribuyan entre las comunidades locales más afectadas.

Las iniciativas de pago por servicios ecosistémicos y la restauración de los ecosistemas han ido evolucionando y mejorando en los últimos años, prestando cada vez mayor atención a que los beneficios sean equitativos y que se aborden las necesidades de los pobres. Algunos nuevos instrumentos de mercado como las compensaciones por pérdida de biodiversidad, los bancos de humedales o los permisos negociables pueden aportar soluciones más eficientes [24]. Por ejemplo, en Costa Rica, casi un millón de hectáreas de bosque han formado parte de esquemas de pagos por servicios ecosistémicos en algún momento. Mientras tanto, la cubierta forestal del país ha vuelto a ocupar más del 50 % de su superficie terrestre, desde el mínimo alcanzado en los años ochenta de poco más del 20 % [25]. En el estado de Oregón (Estados Unidos), cada dólar de inversión pública destinado a la restauración se multiplica en términos de actividad económica entre 1,7 y 2,6 veces a través de los ciclos económicos [26]. Natura 2000, una red ecológica de áreas protegidas del territorio de la Unión Europea, ha generado beneficios por valor de 300.000 millones de euros anuales a partir de costos estimados en 5.800 millones de euros por año. Natura 2000 ha dado soporte al equivalente a 12 millones de puestos de trabajo a tiempo completo por año entre 2006 y 2008 [27].

A través de políticas e inversiones fiscales verdes que influyan en el desempeño de los sectores de la economía dependientes de los recursos naturales, se puede incidir directamente en el bienestar de los pobres. Por ejemplo, un estudio reciente realizado en Tanzania demuestra que invertir en silvicultura sostenible para ampliar la capacidad del sector de suministro de bienes y servicios forestales redundaría en un aumento de los ingresos para la población rural pobre, la población rural no pobre y los pobres de las áreas urbanas [28]. La incorporación de consideraciones ambientales en la agricultura reporta beneficios multidimensionales y ha demostrado aumentar la productividad agrícola entre un 59 % y un 179 % [29]. Bien administradas, medidas fiscales verdes pueden llevar a un crecimiento significativo del ingreso per cápita para las personas situadas en la base de la pirámide de la riqueza, entre otras cosas, fomentando otras formas de empleo decente a largo plazo y asegurando pisos de protección social. Toda reforma fiscal deberá ir necesariamente acompañada de una integración de los objetivos ambientales y de pobreza en la planificación de desarrollo a nivel nacional, subnacional y sectorial [30].

Es fundamental innovar en las instituciones, las cadenas de suministro y la tecnología si se quiere alcanzar el doble objetivo de conseguir una economía que incorpore los temas ambientales y aumentar el acceso de los pobres a unos servicios básicos obtenidos de manera sostenible. Abundan los ejemplos de servicios tecnológicos básicos de bajo costo, bajo consumo de carbono y bajo mantenimiento aplicables a la vivienda, la energía, el agua potable, el saneamiento, los servicios de disposición de residuos, tanto en áreas rurales como urbanas [31]. Además, a través de servicios financieros a pequeña escala ligados a beneficios ambientales positivos, se pueden vincular la agenda social y la agenda ambiental para generar ingresos y ahorros sostenidos para la población pobre. Alineando el sistema financiero, especialmente el capital financiero del sector privado que asciende a unos 225 billones de dólares, para satisfacer la necesidad de proporcionar una cobertura universal de servicios básicos obtenidos de forma sostenible, se puede favorecer la creación de mecanismos y negocios de macro y microfinanzas, laboratorios de innovación y millones de pequeñas y medianas empresas y puestos de trabajo en todo el mundo, lo cual proporcionaría el impulso necesario para el crecimiento económico, fomentando a su vez la reducción de la pobreza y la mejora de las condiciones de vida.

En conclusión, el enverdecimiento de las medidas de política social y económica ofrece opciones viables para una erradicación de la pobreza compatible con el desarrollo económico y la minimización de los riesgos ambientales.

Más referencias en: <http://www.unep.org/post2015>

Comments and questions can be sent to:
unep.post2015@unep.org

www.unep.org